

JUNIO 18 DE 1919

14.^a REUNION — 12.^a Sesión ordinaria

PRESIDENCIA DEL SEÑOR D. ARTURO GOYENECHÉ

DIPUTADOS PRESENTES: Aldao Ricardo, Anquín Ireneo de, Arámburu Juan B., Arancibia Rodrí A., Aranda Macedonio, Arioz Miguel A., Arce José, Atencio Juan V., Avellaneda Marco Aurelio, Avellaneda Nicolás A., Barceló Alberto, Beiró Francisco, Bermúdez Manuel A., Berrondo Valentín, Bravo Mario, Bunge Augusto, Caracocha Pedro, Carranza Wenceslao C., Carrasco Alejandro M., Casás José O., Cordero Octavio, Cornet Pedro L., Corvalán Santiago E., Costa Julio A., Daneri Luis M., Davel Ricardo J., Demaría (hijo) Mariano, Dickmann Enrique, Escobar Adrián C., Fernández Jacinto, Ferrarotti Juan Luis, Ferreyra (hijo) Anrés, Galíndez Francisco R., Gallegos Moyano Carlos, Garat Damián P., Garro Allende Juan E., Gatica Teófilo I., Gibert Pedro F., González José Antonio, Goyeneche Arturo Hernández Sabá Z., Jiménez Beltrán Dámaso, Lagos Lauro, Laurencena Miguel, Maidana Julián, Martínez Enrique, Melo Carlos F., Méndez Casariego Alberto, Moreno (hijo) Rodolfo, Mosca Enrique M., Mouesca Eduardo M., O'Farrell Juan, Oliva Moisés J., Padilla Eduardo, Padilla Ernesto E., Pagés Pedro T., Pérez Virasoro E., Quiroga Marcial V., Raffo de la Reta Julio C., Repetto Nicolás, Riú Francisco A., Robín Castro Napoleón, Rodríguez Alfredo, Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge Raúl, Sánchez Bustamante T., Sánchez, Sorondo Matías G., Santamarina Antonio, Solanet Pedro, Solari Benjamín T., Tamborini José F., Ivaras Agustín, Valle Delfor del, Vergara Valentín, Vidart Roberto, Videla Horacio C., Villarreal Agustín J., Zalazar José María. DIPUTADOS AUSENTES: CON LICENCIA: Breard Eugenio E., Cabrera Aníbal, Leguizamón Arturo, Páez José E., Vera Octaviano S. CON AVISO: Agote Luis, Cabrera Enrique, Carosini Alberto H., Iriondo Néstor de, Jaramillo José M., Justo Juan B., Martínez José María, Molina Víctor M., Moreno J. Alejandro, Pradère Carlos M., Rougés León, Rubilar Francisco, Sosa Leopoldo, Tomaso Antonio de, Vaca Narvaia Jesús. SIN AVISO: Araya Rogelio, Becú Carlos A., Bonifacio Benjamín, Caballero Ricardo, Cornejo Julio, Hernández Diógenes, Isnardi Arturo, Lehmann Guillermo, Martínez Zuviria Gustavo, Massa Arturo H., Montes José Antonio, Puch Angel E., Remonda Mingrand F.

SUMARIO

- 1.—Se da por aprobada el acta de la sesión anterior.
- 2.—Manifestación del señor diputado doctor José Arce respecto de su solidaridad con la actitud de sus colegas de la comisión de presupuesto en la sesión de ayer.
- 3.—Asuntos entrados.
- 4.—Proyecto de ley del señor diputado doctor Carlos A. Becú, tendiente al abaratamiento de los artículos de consumo necesarios.
- 5.—Proyecto de ley de los señores diputados ingeniero Pedro T. Pagés y doctor Rodolfo Moreno (hijo), fundado por el primero, por el que se prohíbe la matanza y exportación de animales hembras, ovinos y bovinos.
- 6.—Proyecto de ley del señor diputado doctor Rodolfo Moreno (hijo), por el que se reglamenta la preparación y discusión del presupuesto general de la nación.
- 7.—Proyecto de código rural para los territorios nacionales, de los señores diputados doctores Matías G. Sánchez

Sorondo y Marco Aurelio Avellaneda, con fundamentos del primero.

- 8.—Proyecto de ley de inmigración, reproducido por el señor diputado doctor Enrique Dickmann.
- 9.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado don Alfredo Rodríguez, sobre atribuciones de los actuarios.
- 10.—Proyecto de ley reproducido por el mismo señor diputado sobre testigos en juicio ordinario.
- 11.—Proyecto de ley de los señores diputados doctores Matías G. Sánchez Sorondo y Marco Aurelio Avellaneda, sobre marcas y señales.
- 12.—Licencia para faltar a sesiones concedida al señor diputado don Arturo Leguizamón.
- 13.—Destínase a la comisión de legislación los proyectos de ley de los señores diputados Moreno (R.), Dickmann y Melo relativos a inmigración, y el del señor diputado doctor Francisco A. Riú sobre venta de aceites.
- 14.—Termina la consideración del proyecto de resolución del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta, por el que se solicitan informes del señor ministro del interior respecto de

la situación de la provincia de Mendoza, siendo aprobado.

- 15.—Incidente a propósito de palabras vertidas en la presente sesión.
- 16.—Mensaje y proyecto de ley del poder ejecutivo, por el que se amplía la emisión de cédulas hipotecarias argentinas.
- 17.—Consideración del despacho de la comisión de justicia en el proyecto de varios señores diputados sobre reglamentación del ejercicio de la procuración.
- 18.—Indicación del señor diputado doctor Rodolfo Moreno (hijo) relativa a la distribución del Diario de Sesiones.
- 19.—Continúa la consideración del despacho a que se refiere el número 17.

—En Buenos Aires, a 18 de junio de 1919, siendo las 3 y 40 p. m., ocupan sus asientos en el recinto los señores diputados en quórum legal.

1

ACTA

Sr. Presidente (Goyeneche). — Que da abierta la sesión con asistencia de 61 diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. Zalazar. — Hago indicación para que se suprima la lectura del acta y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Haciendo asentimiento, queda aprobada.

2

ACLARACION

Sr. Arce. — Pido la palabra.

Por causas completamente ajenas a mi voluntad no pude asistir a la sesión de ayer. He tenido conocimiento recién hoy, por el Diario de Sesiones, que el señor diputado por Tucumán, al promover la cuestión que ha dado origen a la sanción del presupuesto de 1918 para 1919, invocaba en cierto modo la representación de los diputados de un sector determinado para ha-

cer presente a la cámara que ellos estaban dispuestos a adoptar la indicación que formulaba.

Quiero declarar, por lo que a mí respecta, señor presidente, que estoy en absoluta disidencia con la indicación formulada por el señor diputado por Tucumán, y naturalmente, como conozco bien las prescripciones reglamentarias, no ha de ser esta la oportunidad en que yo me ponga a discutir la sanción de referencia, desde que constituye una resolución de la cámara, pero sí quiero dejar constancia de que como miembro de ese sector, con la especial circunstancia de ser miembro de la comisión de presupuesto, no he participado de esa deliberación y, en consecuencia, no puedo aceptar las resoluciones a que en ella se haya llegado.

He creído de mi deber decir estas palabras, a objeto de solidarizarme con la actitud del señor presidente y demás miembros de la comisión de presupuesto y, también, para dejar constancia de la situación que como miembro de la comisión de presupuesto se me ha creado dentro del sector a que pertenezco.

Sr. Padilla (E. E.). — Pido la palabra.

De la propia manifestación del señor diputado por Buenos Aires resulta que no ha estado presente ayer y, por consiguiente, no ha podido tomar parte en la deliberación de los diputados de este sector que resolvieron presentar a la cámara la moción que yo formulé.

Así, pues, dejo bien aclarado el hecho de que no podía contar con la aprobación del señor diputado desde el momento que no había estado presente.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Comunicaciones oficiales

—El concejo deliberante de San Nicolás

lación hasta la cantidad de mil millones de pesos moneda nacional de curso legal, en cédulas hipotecarias.

Art. 2.º — El Banco Hipotecario Nacional podrá emitir cédulas de las nuevas series hasta el importe de las retiradas de la circulación, de conformidad a los artículos 3.º y 18 de la ley N.º 8172 y 1.º de la presente ley.

Art. 3.º — Toda emisión que se hiciere de acuerdo con los artículos anteriores será por series numéricas de cincuenta millones, resuelta por dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del directorio y autorizada por decreto del poder ejecutivo.

Art. 4.º — Comuníquese al poder ejecutivo, etcétera.

D. E. SALABERRY.

—A la comisión de hacienda.

17

EJERCICIO DE LA PROCURACION

Sr. Rodríguez (A.) — Pido la palabra.

Creo que la cámara debe entrar a tratar el asunto que estaba fijado para esta sesión, que es el despacho de la comisión de justicia sobre reglamentación de la procuración y arancel de escribanos.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se va a considerar el asunto a que se refiere el señor diputado por Buenos Aires.

—Se lee:

Honorable cámara:

Vuestra comisión de justicia ha estudiado los proyectos de ley presentados por los señores diputados Avellaneda (N. A.), Escobar, Fernández (J.) y Moreno (R.) (hijo), reglamentando el ejercicio de la procuración; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 1.º — La representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la capital de la república y territorios nacionales, así como ante la justicia federal de las provincias, sólo podrá ser ejercitada:

- 1) Por los abogados con título expedido por universidad nacional.
- 2) Por los procuradores inscriptos en la matrícula correspondiente.
- 3) Por los escribanos nacionales.

- 4) Por los que ejerzan una representación legal.

Art. 2.º — La secretaría de la suprema corte de justicia, o el funcionario de su dependencia que designe este tribunal, llevará un registro de matrícula de procuradores, en el cual serán inscriptos, a solicitud de parte interesada, los que reunan las condiciones establecidas en la presente ley. Este registro está a cargo de las cámaras federales de apelación en las capitales de provincias que las tuvieren y de los jueces de sección o letrados en las provincias y en los territorios nacionales, respectivamente. Unos y otros funcionarios comunicarán oportunamente a la suprema corte nacional la nómina de los inscriptos a los efectos de su anotación en el registro de esta última.

Art. 3.º — Para ser inscripto en la matrícula de procuradores, se requieren las siguientes condiciones:

- 1) Mayoría de edad.
- 2) Juramento de estar en el pleno goce de sus derechos civiles y de no estar afectado de ninguna de las inhabilidades establecidas en la presente ley.
- 3) Título acordado por universidad nacional; y a falta de éste, serán títulos de suficiencia.
 - a) El título de doctor en jurisprudencia emanado de universidades argentinas no nacionalizadas;
 - b) Los certificados expedidos en forma por las facultades universitarias de la nación que acrediten haber sido aprobado el postulante en todas las materias codificadas;

- 4) Constituir a la orden del presidente de la suprema corte, en la capital federal, un depósito de cinco mil pesos moneda nacional en efectivo o su equivalente en títulos de crédito público nacional o en cédulas hipotecarias argentinas.

En la justicia federal de las provincias y territorios nacionales este depósito será de dos mil pesos moneda nacional o su equivalente en títulos nacionales constituidos a la orden de los respectivos presidentes de las cámaras de apelaciones o jueces de sección o letrados, en su caso.

Art. 4.º — Los que habiendo desempeñado más de diez años empleos judiciales de actuación, en los tribunales de la capital, solicitaran su inscripción dentro de los seis meses de su cesantía no motivada por el mal desempeño de sus funciones, con el justificativo legal del hecho enunciado y el certificado del depósito requerido por el artículo anterior, podrán ser inscriptos en la matrícula de procuradores.

Art. 5.º — No podrán inscribirse en el registro de procuradores:

- 1.º Los que hubiesen sido condenados a penitenciaría o presidio; o a cual-

quiera pena por delitos contra la propiedad o contra la administración o la fe pública.

2.º Los escribanos con registro, titulares o adscriptos.

3.º Los funcionarios o empleados públicos.

Art. 6.º — Cualquier juez o tribunal ante el cual se probara que un procurador en ejercicio se encontrara comprendido en alguno de los casos de inhabilidad de la presente ley, decretará su eliminación de la matrícula, poniendo el hecho en conocimiento del funcionario encargado de ésta. El auto que decreta la eliminación será apelable en relación, a menos que él fuere dictado por la suprema corte.

A.º 7.º — El depósito a que se refiere el inciso 4.º del artículo 3.º, garantiza el pago de las costas judiciales a que su parte estuviera obligada, de las multas disciplinarias que fuesen impuestas al procurador y las responsabilidades en que incurriera con relación a su mandante por faltas, omisiones o delitos en el desempeño del mandato judicial.

Este depósito no será embargable por otras causas u obligaciones que las determinadas a su destino, y si por tales motivos disminuyera o desapareciera, deberá integrarse dentro de los treinta días subsiguientes, bajo pena de suspensión del procurador, la que será pronunciada de oficio.

No podrá retirarse el depósito, mientras no se cancele la inscripción del procurador, o se hayan hecho efectivas las responsabilidades del mismo, en su caso.

Art. 8.º — Los procuradores serán eliminados del registro en los siguientes casos:

1.º Por cancelación voluntaria de la inscripción;

2.º Por reiteradas represiones disciplinarias o una grave incorrección en el desempeño del mandato judicial.

3.º Por condena sobreviniente a causa de los delitos enumerados en el inciso 1.º del artículo 5.º.

4.º Por insania o incapacidad declarada judicialmente.

En todos estos casos procede la devolución del depósito o de la parte del mismo que no se afectare por alguna de las causas establecidas en el artículo 7.º.

Art. 9.º — Los procuradores serán suspendidos por un término de uno a seis meses, como máximo, por resolución ejecutoriada de los tribunales federales u ordinarios de la capital y federales de las provincias y territorios nacionales;

1.º En los casos autorizados por las leyes de procedimiento.

2.º Por falta de integración del depósito prescripto en el inciso 4.º del artículo 3.º en su respectivo caso.

3.º Por haberse dictado auto de prisión preventiva en cualquier proceso criminal.

Los tribunales comunicarán al funcio-

rio encargado del registro de matrículas las declaraciones de incapacidad, los autos de prisión, las condenas, las suspensiones, multas o apercibimientos decretados contra procuradores inscriptos, a los efectos de su anotación en el registro y de las medidas que fueren conducentes.

Art. 10. — Los procuradores podrán fiar por contrato la retribución de sus servicios hasta la terminación del juicio, el que deberá formularse por escrito, no admitiéndose otra prueba de su existencia que la exhibición del documento y su autenticación.

No será lícito el pacto de "cuota litis" ni contratar la retribución con arreglo al tiempo que dure el asunto.

Art. 11. — Son deberes de los procuradores:

1.º Interponer los recursos legales contra toda sentencia definitiva adversa a su parte y contra toda regulación de honorarios que corresponda abonar a la misma, salvo el caso de tener instrucciones por escrito en contrario de su respectivo comitente.

2.º Asistir por lo menos en los días designados para las notificaciones en la oficina, a los juzgados o tribunales donde tengan pleitos y con la frecuencia necesaria en los casos urgentes.

3.º Presentar los escritos debiendo llevar firma de letrado los de demanda, oposición de excepciones y sus contestaciones, los alegatos y expresiones de agravios, los pliegos de posiciones e interrogatorios, aquellos en que se promuevan incidentes en los juicios y, en general, todos los que sustenten o controviertan derechos, ya sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa.

Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión, sea suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el actuario quien certificará en los autos esta circunstancia, sea por la mera ratificación que separadamente se hiciere con firma de letrado.

4.º Concurrir puntualmente a las audiencias que se celebren en los juicios en que intervengan.

5.º Conservar con el mayor cuidado los documentos que les confíen sus clientes y ponerlos en conocimiento del abogado, así como los antecedentes de hecho que les suministren.

6.º Requerir y recoger los traslados, exhortos, mandamientos y demás papeles que se refieran a los pleitos.

7.º Tener al poderdante y al abogado siempre enterados del curso del asunto.

8.º Conservar en buen orden todas las cartas y telegramas que reciban, relativos a los asuntos que les están encomendados.

Art. 12. — Los escribanos nacionales que optaren por el ejercicio de la procuración, estarán obligados a acreditar su respectivo título y presentar el certificado correspondiente al depósito prescrito en el inciso 4.º del artículo 3.º. Los abogados nacionales pueden ejercer la procuración por el sólo hecho de tener su título inscripto.

Art. 13. — Podrán ser inscriptos también en la matrícula los procuradores y escribanos con título provincial expedido con anterioridad a la presente ley y los que no teniendo título alguno en las condiciones prescriptas por ella, acreditaran, dentro de los seis meses de su promulgación, con los certificados que constaten su actuación en los expedientes, una práctica judicial de diez años en el ejercicio de la procuración en los tribunales de la capital, provincias o territorios nacionales y acompañaren el certificado del depósito requerido por el inciso 3.º del artículo 4.º.

Art. 14. — El título provincial de procurador o escribano expedido según las leyes locales, con posterioridad a la presente, habilitará para el ejercicio de la profesión ante los tribunales federales en las provincias donde hubiera sido otorgado.

Art. 15. — Exceptúanse de las disposiciones establecidas en la presente ley las personas de familia dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.

Art. 16. — Los procuradores que intervienen en juicios iniciados antes de la vigencia de esta ley pueden continuarlos hasta su terminación.

Art. 17. — Deróganse todas las leyes de carácter orgánico o procesal que se opongan a la presente.

Art. 18. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Sala de la comisión, julio 15 de 1918.

J. Alejandro Moreno. — D. Jiménez Beltrán. — José Antonio González. — J. M. Jaramillo.

Proyecto del señor diputado Avellaneda

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 1.º — Salvo los representantes de las personas jurídicas y de los incapaces, los síndicos, los procuradores fiscales y las personas de familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y siempre que estas últimas sean solventes, a juicio del juez, o den una fianza a su satisfacción, nadie podrá comparecer ante los tribunales de la capital federal, de cualquier jurisdicción o jerarquía, por un derecho que no sea propio, sin ser abogado o escribano de la matrícula o procurador diplomado por

una universidad nacional, también matriculado, de acuerdo con los requisitos establecidos en la presente ley.

Art. 2.º — Para optar a la profesión de procurador diplomado, se requiere ser persona hábil para estar en juicio, mayor de edad y haber cumplido las formalidades que se prescriben en esta ley.

Art. 3.º — Las solicitudes para ser inscripto como procurador se presentarán a la cámara en lo civil en turno, con los siguientes comprobantes:

- 1.º Comprobación, en la forma prescripta por el código civil, de tener la edad requerida.
- 2.º Constancia de haber justificado, por información, de que es persona hábil para estar en juicio.
- 3.º Certificado o diploma de la universidad respectiva de haber sido aprobado en exámenes que sus estatutos y reglamentos establezcan para la profesión de procurador.

Art. 4.º — Los procuradores, para ejercer la profesión, deben dar previamente una fianza por la suma de cinco mil pesos moneda nacional, para garantizar no sólo las responsabilidades de ellos para con sus mandantes, por faltas, omisiones o delitos en el desempeño de su mandato sino también el pago de costas o multas, cuando proceda responsabilizarse personalmente de ellas.

Art. 5.º — La fianza a que se refiere el artículo anterior no es embargable sino por motivos de su destino, y puede ser otorgada por persona reconocidamente abonada o de responsabilidad comprobada, que tenga su domicilio real en la capital de la república, o en efectivo, o en títulos de la nación al tipo de cotización de la bolsa de comercio, y se depositará en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del presidente de la cámara de apelación en lo civil. Si por cualquier causa disminuye, deberá completarse dentro del término de treinta días, bajo pena de suspensión de oficio, que dictará el tribunal correspondiente.

Art. 6.º — Llenados los requisitos exigidos en el artículo precedente, la cámara en lo civil en turno, si no hallare observación que formular a la información judicial y al diploma de suficiencia, señalará una audiencia para que el aspirante preste juramento de buen y fiel desempeño profesional, y ordenará su inscripción en un libro especial que llevará la secretaría de ese tribunal, la que lo hará saber a los jueces y tribunales de la capital.

Art. 7.º — Llevarán firmas de letrado los escritos de demanda, oposición de excepciones, y sus contestaciones, los alegatos y expresiones de agravios, los pliegos de posiciones e interrogatorios, y todo escrito en que se aleguen nulidades o cualquier otro incidente.

Art. 8.º — Es obligatorio a los procuradores la representación en juicio de las personas que hayan obtenido declaratoria de pobreza, sin derecho a cobrar honorarios si-

no en el caso de mejorar aquéllas su fortuna.

Art. 9.º — Los procuradores llevarán un libro en que conste su correspondencia con sus poderdantes; otro en que anoten los poderes que se le confieran, y un tercero en que conste el estado de los juicios.

Art. 10.º — Los jueces y tribunales, sin perjuicio de la facultad que des acuerdan las leyes de procedimientos para aplicar correcciones disciplinarias, podrán suspender a los procuradores por el término de uno hasta seis meses, según la gravedad del caso, cuando entorpecieren el procedimiento de los juicios con instancias o articulaciones manifiestamente improcedentes o que no respondan a un fin útil para la defensa de los derechos que representan.

Art. 11.º — Los procuradores podrán fijar por contrato el valor de sus honorarios, sin sujeción a otras leyes que el código civil, pero aquél deberá ser redactado por escrito bajo pena de nulidad y no se admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento o la confesión de parte de haber sido firmado.

Art. 12.º — No les será lícito contratar el valor de la representación con arreglo al tiempo que dure el asunto.

Art. 13.º — El contrato sobre honorarios no tendrá efecto sino entre los otorgantes.

Art. 14.º — No podrán ejercer la procuración:

- 1.º Los procesados por cualquier delito, siempre que se haya dictado auto de prisión preventiva;
- 2.º Los que hubiesen sido condenados, dentro o fuera del país, por cualquier clase de delitos, mientras no hayan cumplido su condena;
- 3.º Los concursados o fallidos no rehabilitados;
- 4.º Los escribanos mientras ejerzan su profesión.
- 5.º Los funcionarios o empleados de los tribunales o de cualquier otra rama de la administración pública.

Art. 15.º — Los procuradores en ejercicio, que dentro de los seis meses contados desde la sanción de esta ley comprueben haber llenado los requisitos establecidos en el artículo 2.º, referentes a la mayoría de edad y habilidad para estar en juicio, y aceptada la fianza, podrán continuar en su ejercicio, si prueban por medio de un certificado de una de las cámaras de apelaciones o de los jueces de primera instancia haber ejercido reiteradamente durante diez años, o haber sido empleado de los tribunales de la capital de cualquier jurisdicción o jerarquía, durante el mismo tiempo.

Art. 16.º — La presente ley empezará a regir a los seis meses de su promulgación, y los juicios iniciados antes de su promulgación podrán continuarse hasta su terminación por los mismos representantes.

Art. 17.º — Los procuradores que tuvieran más de cinco años de ejercicio y menos de diez, podrán continuar ejerciendo la procura-

ción, siempre que dentro de los tres años siguientes a la promulgación de esta ley obtuvieren el título de procurador diplomado.

Art. 18.º — Las cámaras de lo civil en pleno dictarán los reglamentos que fueren necesarios para la mejor aplicación de la presente ley.

Art. 19.º — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

Art. 20.º — Comuníquese al poder ejecutivo.

Nicolás A. Avellaneda.

Proyecto del señor diputado Escobar

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 1.º — Para comparecer en juicio ante los tribunales ordinarios o federales de la capital de la nación, de cualquier jurisdicción o jerarquía, por un derecho que no sea propio, se requiere ser abogado o tener título de procurador, estar inscripto en la matrícula respectiva y haber otorgado la fianza que esta ley prescribe.

Art. 2.º — Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior a los abogados y escribanos de la matrícula, los representantes legales de las personas jurídicas o visibles, los síndicos y las personas de familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que estas últimas sean solventes a juicio del juez, o den una fianza a su satisfacción.

Art. 3.º — El título de procurador será otorgado por la Universidad Nacional, previa aprobación de los estudios de las siguientes materias: organización judicial, procedimientos civiles y comerciales de los tribunales federales y ordinarios de la capital, conocimientos generales del procedimiento penal, del código civil (especialmente el mandato), del código de comercio y del código penal.

Art. 4.º — Las cámaras de apelación en lo civil, turnándose como ellas lo establezcan, llevarán la matrícula de procuradores.

Ante la cámara en turno se presentarán las solicitudes de inscripción, con los siguientes requisitos:

- 1.º Comprobación de la mayor edad en la forma prescripta por el código civil.
- 2.º Constancia de haber justificado ante un juez de lo civil, con intervención del ministerio fiscal, mediante información de tres testigos y de la que el juez considere necesaria, ser el interesado persona hábil para estar en juicio y tener buena conducta.
- 3.º Presentación del título universitario de competencia.

Art. 5.º — Llenados los requisitos exigidos en el artículo precedente, la cámara, si los encontrase suficientes, señalará audiencia para que el peticionante preste juramento de buen y fiel desempeño profesional y or-

denará su inscripción en un libro especial que llevará al efecto.

Art. 6.º — Los procuradores, para ejercer la profesión, deben dar previamente una fianza de diez mil pesos moneda nacional (10.000 \$ m.n.), ante la cámara civil, cuyo objeto es garantizar, no sólo las responsabilidades de aquéllos para con sus mandantes, por faltas, omisiones o delitos en el desempeño del mandato, sino también el pago de costas o multas cuando proceda responsabilizarlos personalmente por ellas.

Si la garantía fuese personal, se otorgará por persona reconocidamente abonada o de responsabilidad comprobada, que tenga su domicilio real en la capital y no se encuentre inhibida; y si fuese real, se admitirá hipoteca suficiente, dinero efectivo o títulos de renta de la sanción al tipo de cotización de la Bolsa de comercio, debiendo depositarse el dinero y los títulos en el Banco de la Nación Argentina a la orden del presidente de la cámara de apelaciones en lo civil.

Este tribunal llevará un libro en que se anotarán las fianzas de los procuradores, con las enunciaciones principales.

Art. 7.º — Ordenada la inscripción en la matrícula, y otorgada la escritura pública de fianza, la cámara comunicará el hecho a los demás tribunales y jueces ordinarios y a la suprema corte nacional, quien lo hará saber a los tribunales de su dependencia, a fin de que todos reconozcan como procurador habilitado para ejercer la profesión al que ha cumplido aquellos requisitos.

Art. 8.º — El depósito constitutivo de la fianza de los procuradores responde exclusivamente a los fines indicados en el artículo 6.º y no es embargable sino por motivos de su destino.

Art. 9.º — Si por cualquier causa se extinguiera o disminuyera la fianza otorgada, deberá darse una nueva o completarse dentro de quince días, so pena de suspensión en el ejercicio de la profesión, que la cámara respectiva decretará de oficio y comunicará inmediatamente en la forma que dispone el artículo 7.º.

Art. 10.º — No pueden ejercer la profesión de procurador los condenados en juicio criminal, dentro o fuera del país, mientras cumplan o deban cumplir su condena.

Art. 11.º — Los escribanos de la matrícula podrán ejercer la procuración sin otro requisito que la fianza; pero les está prohibido ejercer simultáneamente ambos oficios.

Art. 12.º — No les será permitido el ejercicio de la procuración a los funcionarios y empleados de los tribunales o de cualquier otra rama de la administración pública.

Art. 13.º — Las personas a quienes se refieren las prohibiciones de los tres artículos precedentes, no pueden aceptar poderes, ni aun para substituirlos, y los que tuvieren con anterioridad caducan por la inhabilidad sobreviniente.

Art. 14.º — Los procuradores podrán fijar por contrato la retribución de sus servicios, sin sujeción a otras leyes que el código civil; pero aquél deberá ser redactado por escrito, bajo pena de nulidad, y no se admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento a la confesión de parte de haber sido firmado.

No les será lícito contratar la retribución con arreglo al tiempo que dure el asunto.

Art. 15.º — El contrato sobre honorarios no tendrá efecto sino entre los otorgantes, y en caso de condenación en costas, la parte vencedora será reembolsada por regulación judicial, de los honorarios de su procurador.

Art. 16.º — Es obligatorio a los procuradores la representación en juicio de las personas que hayan obtenido declaratoria de pobreza, sin derecho a cobrar honorarios, salvo el caso de mejorar aquéllas de fortuna.

Art. 17.º — Son deberes de los procuradores:

- 1.º Asistir por lo menos en los días designados para las notificaciones en la oficina a los juzgados o tribunales donde tengan pleitos y con la frecuencia necesaria en los casos urgentes.
- 2.º Concurrir puntualmente a las audiencias que se celebren en las juicios en que intervengan.
- 3.º Formalizar los pedimentos para los cuales no se requiera firma de letrado.
- 4.º Conservar con el mayor cuidado los documentos que les confíen sus clientes y ponerlos en conocimiento del abogado, así como los antecedentes de hecho que les suministren.
- 5.º Requerir y recoger los traslados, exhortos, mandamientos y demás papeles que se refieran a los pleitos.
- 6.º Tener al poderdante y al abogado siempre enterados del curso del asunto.
- 7.º Llevar un libro copiador de su correspondencia con sus mandatos; otro en que anoten los poderes que se les confíen y su caducidad; y un tercero en que conste el estado de los juicios. Estos libros serán rubricados por el presidente de la cámara en lo civil, quien pondrá en la primera hoja una nota con indicación del número de folios que contienen, y ordenará las anotaciones necesarias en el registro de libros de procuradores que deberá llevar la secretaría del tribunal.
- 8.º Conservar en buen orden todas las cartas y telegramas que reciban, relativos a los asuntos que les están encomendados.
- 9.º Interponer los recursos legales de

toda sentencia definitiva adversa a su parte, salvo el caso de que su poderante les diere por escrito instrucciones contrarias.

Art. 18. — Los jueces exigirán a los procuradores firma de letrado en los escritos que no sean de mera substanciación o concernientes a actos de jurisdicción voluntaria que no se hubiesen convertido en asuntos contenciosos.

Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión, sea subscribiendo un abogado el mismo escrito ante el actuario, quien certificará en los autos esta circunstancia, sea por la mera ratificación que separadamente se hiciere con la firma de letrado o del interesado.

No será necesaria la firma de letrado en los asuntos que se ventilen ante los jueces de paz, sin perjuicio de que éstos puedan exigirla cuando los litigantes o los apoderados traben la marcha regular del juicio.

Art. 19. — Los jueces y tribunales, sin perjuicio de la facultad que les acuerdan las leyes de procedimientos para aplicar correcciones disciplinarias, podrán suspender a los procuradores hasta por un mes cuando entorpecieren el procedimiento de los juicios con instancia o articulaciones manifestamente improcedentes o que no respondan a un fin útil para la defensa de los derechos que representan. Esta resolución será susceptible de los recursos de reposición y apelación en subsidio, cuando fuese dictada por los jueces inferiores, y sólo del primero de esos recursos, cuando emanase de los tribunales superiores.

La resolución ejecutoria que imponga la suspensión, será comunicada a la cámara de lo civil en turno, quien dispondrá su anotación en el libro de suspensiones y la hará saber a los demás jueces y tribunales.

Art. 20. — La suspensión de los procuradores en el ejercicio de la profesión por las inhabilitaciones que esta ley establece, será decretada por la cámara de lo civil en turno. Contra la resolución que se dicte podrá interponerse el recurso de reposición.

Art. 21. — Quedarán exentos del requisito del título universitario los procuradores en ejercicio que acrediten haber ejercido habitualmente la profesión durante diez años o haber sido empleados de los tribunales letrados de la capital, de cualquier fuero, jurisdicción o jerarquía, durante el mismo tiempo. Esta justificación sólo podrá hacerse mediante certificado de un tribunal superior o de dos jueces en lo civil o comercial o testimonio de tres abogados que tengan estudio abierto en la

capital desde antes del término de diez años.

Los que se hallen en estas condiciones se inscribirán en la matrícula de procuradores dentro de seis meses contados desde la promulgación de esta ley, llenando las demás formalidades establecidas, y deberán otorgar la fianza correspondiente para ejercer la procuración.

Art. 22. — Los actuales procuradores que tuvieren un ejercicio habitual de más de cinco años y menos de diez, comprobado en la forma y tiempo establecidos en el artículo anterior, quedarán habilitados provisoriamente para ejercer la procuración durante tres años desde la promulgación de esta ley, siempre que dentro de los seis meses cumplan los demás requisitos exigidos por el artículo 4.º y den la fianza prescrita. Vencidos los tres años, cesarán en su ejercicio si no se hubiesen inscrito en la matrícula presentando el título universitario.

Art. 23. — El procurador que por cualquier motivo dejare de ejercer la profesión, podrá solicitar la cancelación de la fianza. El presidente de la cámara otorgará la publicación de edictos en el "Boletín Judicial" a costa del solicitante, durante quince días haciéndolo saber a los interesados; y si durante otros quince no se dedujere oposición, accederá a lo pedido.

Art. 24. — El fiador podrá pedir en cualquier momento la cancelación de la fianza otorgada. Presentada la solicitud, el presidente del tribunal requerirá al procurador para que otorgue fianza en el término y bajo el apercibimiento establecido en el artículo 9.º y procederá en cuanto se refiere a los terceros interesados en la garantía, como lo dispone el artículo anterior.

Art. 25. — La cancelación de la fianza, sea a petición del procurador o del fiador, no altera en cuanto a las responsabilidades que les incumbe, el término que corresponde según las leyes comunes.

Art. 26. — Los juicios iniciados y los que se iniciaren dentro de seis meses de la promulgación de esta ley, podrán continuarse hasta su terminación por los mismos representantes que en esa época interviniesen en ellos; pero pasado ese tiempo no se admitirán nuevas representaciones sino con arreglo a lo establecido en los artículos precedentes.

Art. 27. — Las cámaras de lo civil en pleno dictarán los reglamentos que fuesen necesarios para la mejor aplicación de la presente ley.

Art. 28. — Deróganse todas las leyes que se opongan a la presente.

Art. 29. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Proyecto del señor diputado Fernández

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 10. — Para comparecer ante

los tribunales letrados de la capital federal, de cualquier jurisdicción, por un derecho que no sea propio debe tenerse título de procurador diplomado.

Art. 20. — Para obtener el título de procurador se requiere:

- a) Ser ciudadano argentino, natural, o legal.
- b) Ser mayor de edad.
- c) Tener capacidad demostrada por estudios universitarios conforme al plan que establezca la facultad de derecho y ciencias sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30. y la práctica constante de dos años en el estudio de un abogado, procurador diplomado o en una secretaría de juzgado o tribunales letrados.
- d) No estar procesado criminalmente, no haber sido condenado a penas aflictivas o haber obtenido su rehabilitación.
- e) No estar concursado o ser fallido rehabilitado.
- f) Justificar buena conducta ante el juzgado civil, con intervención del ministerio fiscal.

Art. 30. — El plan de estudios comprenderá las siguientes materias: derecho civil, derecho comercial, procedimientos civiles y comerciales, nociones de derecho penal, legislación administrativa, derecho constitucional y organización judicial.

Art. 40. — Quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo 20. incisos a), b) y c):

- a) Los procuradores que tengan una práctica continuada de cinco años, la que se justificará con su actuación en los tribunales letrados de la capital federal y con la declaración de dos abogados, por lo menos que tengan estudio abierto desde antes de ese término.
- b) Que los acrediten haber sido empleados de los tribunales letrados de la capital, de cualquier jurisdicción durante cinco años.
- c) Los abogados, escribanos y contadores nacionales, y los que ejerzan una representación de derecho. Los que hayan cursado hasta cuatro años de derecho en universidad nacional, quedan exceptuados de lo dispuesto en el inciso c) del mismo artículo 20.

Art. 50. — No pueden ejercer la procuración los empleados públicos de la administración, en cualquiera de sus ramas o jerarquías y los escribanos en ejercicio, mientras desempeñen sus funciones, salvo lo establecido en la segunda parte del artículo 11.

Art. 60. — Para ejercer la procuración debe darse previamente una fianza por la suma de pesos 5.000 moneda nacional para responder de cualquier responsabilidad que se contrajere en el ejercicio de la profesión. Esta fianza puede ser otorgada por persona reconocidamente abonada o de responsabi-

lidad comprobada, que tenga su domicilio real en la capital de la república o, en efectivo, o en títulos de renta de la nación, al tipo de cotización en la bolsa de comercio, y se depositará en el Banco de la Nación Argentina a la orden del presidente de la cámara de apelaciones en lo civil.

Cuando se disminuyera la cantidad fijada, deberá completarse dentro del término de quince días, bajo pena de suspensión de oficio que dictará el tribunal correspondiente. No será embargable el depósito en efectivo o en títulos, sino por motivo de su destino.

Art. 70. — Los jueces y tribunales, sin perjuicio de la facultad que les acuerdan las leyes de procedimientos, para aplicar correcciones disciplinarias, podrán suspender a los procuradores por el término de un mes hasta un año, según la gravedad del caso, cuando entorpecieren el procedimiento de los juicios con instancias o articulaciones manifiestamente improcedentes o que no respondan a un fin útil para la defensa de los derechos que representan.

Art. 80. — Los procuradores serán privados del ejercicio de su profesión si fuesen condenados por delitos infamantes, acusables por el ministerio público o por notoria mala conducta.

Art. 90. — Llevarán firma de letrado los escritos de demanda, oposición de excepciones y sus contestaciones, los alegatos y expresiones de agravios, los pliegos de posiciones e interrogatorios y todo escrito en que se promueven incidentes en los juicios.

Art. 10. — Los juicios iniciados antes de la vigencia de esta ley, podrán continuarse hasta su terminación, por los mismos representantes que en esa época interviniesen en ellos; pero no se admitirán nuevas representaciones, sino con arreglo a lo establecido en los artículos precedentes.

Art. 11. — Las disposiciones de esta ley no son aplicables a la justicia de paz. Tampoco lo son, cuando se trate de mandatos conferidos a ascendientes, descendientes o hermanos en las causas en que sean directamente interesados.

Art. 12. — La excelentísima cámara de lo civil velará por el exacto cumplimiento de esta ley y su mejor aplicación.

Art. 13. — Los procuradores, antes de entrar en el ejercicio de su cargo, prestarán juramento ante la excelentísima cámara de lo civil de desempeñarlo fielmente, otorgándoseles el diploma correspondiente.

Art. 14. — Es obligatorio a los procuradores la representación en juicio de las personas que hayan obtenido declaratoria de pobreza sin derecho a cobrar honorarios.

Art. 15. — La presente ley empezará a regir a los seis meses de su promulgación.

Art. 16. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

Art. 17. — Comuníquese al poder ejecutivo.

Jacinto Fernández.

Proyecto del señor diputado Moreno

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etcétera.

Artículo 10. — La representación en juicio ante los tribunales de todos los fueros de la capital y territorios como ante los federales de las provincias sólo podrá ser ejercida:

10. Por los abogados con título expedido por universidad nacional;
20. Por los procuradores inscriptos;
30. Por los escribanos nacionales;
40. Por los que habiendo desempeñado más de diez años empleos en los tribunales, se inscribieran, dentro de los cuatro meses de su cesantía, no motivada por mal desempeño de sus funciones; y
50. Por los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, del otorgante del mandato.

Art. 20. — La secretaría de la suprema corte de justicia o el funcionario de su dependencia que indique ese tribunal, llevará un registro de matrícula de procuradores, en el cual serán inscriptos los que reúnan las condiciones establecidas por la presente ley. La suprema corte podrá encargar a funcionarios judiciales de provincias o territorios la anotación de procuradores en el registro.

Art. 30. — Para ser inscripto en la matrícula de procuradores se requieren las condiciones:

10. Mayoría de edad;
20. Ciudadanía natural o legal con dos años de ejercicio;
30. Título expedido por universidad nacional;
40. Depósito de dos mil pesos moneda nacional en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del presidente de la suprema corte. Este depósito no podrá retirarse mientras no se cancele la inscripción.

Art. 40. — No podrán incluirse en el registro de procuradores:

10. Los que hubiesen sido condenados a penitenciaría o presidio y los que hubiesen sido condenados a cualquier pena por delitos contra la propiedad o contra la fe pública;
20. Los escribanos con registro;
30. Los funcionarios y empleados de la administración y los mismos de la municipalidad de la capital.

Art. 50. — El depósito a que se refiere el inciso 40. del artículo 30. garantizará no sólo las responsabilidades del procurador para con sus mandantes por faltas, omisiones o delitos en el desempeño de

sus funciones, sino también el pago de multas y de costas cuando proceda responsabilizarlo personalmente por las mismas. El depósito no es embargable por otras causas o deudas y si disminuyera o desapareciera por alguno de los motivos enunciados, deberá integrarse dentro de los treinta días bajo pena de suspensión que será pronunciada de oficio por el presidente de la suprema corte.

Art. 60. — Los procuradores serán eliminados del registro en los siguientes casos:

10. Por cancelación voluntaria de la inscripción;
20. Por represiones disciplinarias, incorrección grave o incorrecciones que justifiquen la eliminación, a juicio de la suprema corte;
30. Por condena sobreviniente a causa de los delitos enumerados en el inciso 10. del artículo 40.
40. Por insania o cualquier otra incapacidad que, a juicio de la suprema corte, lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones.

En todos estos casos procede la devolución del depósito o de la parte del mismo que no se afectare por alguna de las causas establecidas en el artículo 50.

Art. 70. — Los procuradores serán suspendidos por un término que no podrá exceder de seis meses:

10. Por resolución ejecutoriada de los tribunales;
20. Por la falta de integración de fianza prescripta en el artículo 50.
30. Por haberse dictado auto de prisión preventiva en los casos de los delitos enunciados en el inciso 10. del artículo 40.

Los tribunales comunicarán al funcionario encargado del registro de matrícula las declaraciones de insania, los autos de prisión, las condenas, las suspensiones, multas y apercibimientos decretados contra procuradores inscriptos a los efectos de su anotación en el registro y de las medidas correspondientes.

Art. 80. — Contra toda sentencia definitiva, adversa a su parte y contra toda regulación de honorarios, el procurador está obligado a interponer el recurso de apelación bajo sanción de responsabilidad personal por los daños y perjuicios y salvo el caso de tener instrucciones en contrario de su comitente.

Art. 90. — Los escribanos deberán llevar para ejercer la procuración las mismas condiciones que los procuradores y estarán sometidos a las mismas reglas. Estas no rigen para los abogados, los que pueden ejercer la procuración por el sólo hecho de tener su título inscripto.

Disposiciones transitorias

Art. 10. — Podrán ser también inscriptos en la matrícula de procuradores los que no teniendo título expedido por universidad nacional, acrediten dentro de los seis meses de la promulgación de la presente ley una práctica judicial de cinco años en el ejercicio de la procuración y el depósito del art. 3o. Transcurrido ese término sólo podrán inscribirse los que reunieren las condiciones establecidas en el artículo 3o.

Art. 11. — Los procuradores que intervienen en juicios iniciados antes de la vigencia de la presente ley, pueden continuarlos hasta su terminación.

Art. 12. — Comuníquese, etcétera.

Rodolfo Moreno (hijo).

Sr. González. — Pido la palabra.

La comisión de justicia me ha conferido el honroso cometido de expresar los fundamentos de su despacho en un asunto que desde hace tiempo preocupa vivamente a la opinión pública y afecta un orden de intereses tan delicados.

La reglamentación del ejercicio de la profesión de procurador constituye una sentida necesidad, que es urgente satisfacer para asegurar la competencia, la probidad y el celo en el desempeño del mandato, y para sanear el ambiente de un crecido número de elementos perniciosos que perturban la recta acción de la justicia.

La conveniencia de reglamentar una profesión que compromete tan vastos e importantes intereses, ha sido unánimemente experimentada por los que se han puesto en contacto con nuestra administración de justicia, y ha repercutido en diversas iniciativas, inspiradas todas en los muy plausibles propósitos, que han sido traídas al estudio y a la reflexión de la cámara.

Necesario es decir, señor presidente, que nuestros tribunales se hallan inficionados de ciertos elementos desprovistos de toda responsabilidad, que sin ambages recurren a los más subalternos medios de vida, a urdir las complicadas tramas que sirven para enredar incautos y obstruir la ordenada acción de la justicia; y ante ese mal, que se acentúa cada día en mayor grado, se impone la enérgica y firme decisión del parlamento de amparar a los que se hallan en la ingrata situa-

ción de ventilar sus derechos en los litigios judiciales.

La legislación general del país, así como todos los órdenes de nuestro progreso, ha seguido la corriente señalada por nuestros sociólogos, iniciada en el centro y difundida después por la periferia, comenzada en este gran centro de irradiación que constituye la capital federal y extendida paulatinamente después por todas las provincias; pero, en este asunto, que es por cierto grave y de tanta trascendencia, del ejercicio de la procuración, merece señalarse la excepción interesante de que esa corriente ha seguido una línea inversa, porque la legislación que defendiera a los litigantes de los malos agentes judiciales, colocándoles vallas infranqueables, ha tenido su origen en las provincias, en las más lejanas de la república, para ser consumada ahora, por obra de este congreso, en virtud de una exigencia perentoria.

Y no es, seguramente, porque el gremio de procuradores haya adolecido de mayores defectos y haya comprometido más seriamente la severa tarea de la justicia en las provincias, que ha sido necesario dictar en ellas la ley de la materia antes que en esta capital, donde pululan todas las variedades de gente del oficio.

Es que debemos confesar que el congreso está en mora desde hace mucho tiempo, notablemente retardado en sancionar la ley que imponga orden y segura responsabilidad en la representación que se ejercita ante los tribunales por el extenso y abigarrado gremio de procuradores, que si bien es verdad posee profesionales muy distinguidos, muy competentes y muy austeros, necesario es reconocer también que tiene ciertos elementos de pésima catadura moral y de una preparación absolutamente nula en derecho.

A llenar ese vacío viene el despacho de la comisión de justicia, en buena hora podría decirse, señor presidente, cuando el país está reclamando de este congreso una obra vasta y positiva de legislación, una tarea que se exteriorice más en la fecunda realidad de los hechos que en el brillo efímero de

las ampulosas disquisiciones meramente teóricas; y viene este despacho, con todas sus deficiencias si se quiere, a suscitar en esta cámara el debate de un asunto evidentemente práctico para que, mancomunados todos en los más sanos y levantados propósitos, propendamos al mayor acierto y a la mayor honestidad en la delicada función de representar a terceros en juicio. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Como habrá podido observarse, dos son los objetivos fundamentales que animan este despacho: exigir la competencia indispensable y asegurar la responsabilidad pecuniaria de los representantes en los juicios. Las diversas disposiciones que contiene giran alrededor de esos fines esenciales.

Respecto de esos dos puntos, la comisión se ha inspirado en los distintos proyectos presentados a la cámara y en las diversas leyes que rigen en la materia, procurando proceder con la estrictez y la prudencia apropiadas en cada caso.

Así, con relación a la capacidad del representante en juicio, ha creído conveniente exigir el título universitario u otros títulos que hagan presumir el *mínimum* de conocimientos indispensables para el correcto desempeño de la profesión. En todos los proyectos presentados a la cámara sobre este asunto, se establece el mismo requisito, que obedece a la necesidad de que el procurador sepa tramitar un juicio conforme a los preceptos de la ley y pueda así auxiliar con eficacia al letrado y al juez en su complicada labor.

El libre ejercicio de la procuración sólo sirve para que un gran número de personas, de los peores antecedentes, vivan a expensas de la buena fe y la ignorancia de las gentes ingenuas que necesitan ventilar sus derechos en los tribunales; sólo sirve para que una profesión, que debiera merecer todo el respeto y la confianza públicas, se deprima y se pervierta, hasta hacerse temible, ejercida como se halla, sin reatos, sin los más mínimos obstáculos, por todos los que quieran lanzarse a las aventuras judiciales, a las correrías por entre la pobre y desprevenida gente; y a ese lugar común de la procuración han ido a acudir, jun-

to con nombres honestos y responsables, todos los bancarroteros, todos los avezados en las mil combinaciones del fraude y del dolo, todos los que han adquirido la habilidosa práctica de prolongar indefinidamente los pleitos y de burlar, sin el menor reparo, la enérgica e imparcial acción de la justicia. Es así, señor presidente, cómo ha caído en un gran desprestigio lo que debiera ser el noble ejercicio de la procuración, y necesario es decir que con las trabas que este despacho propone, exigiéndose en primer término el título universitario, se busca dignificar la profesión, elevar su rango, reservarla sólo para las personas idóneas, que puedan merecer la fe y la confianza del público.

La segunda condición que esencialmente establece el despacho, es el depósito en efectivo de una suma de dinero que garantice la responsabilidad pecuniaria del procurador en sus relaciones con el mandante, el pago de las costas devengadas por su parte y la efectividad de las multas que pudieran imponerse como medidas disciplinarias por incorrecciones o faltas en el desempeño del oficio.

Es sabido que existe una legión numerosa de malos procuradores, carentes de toda responsabilidad pecuniaria, que no tienen reparo en damnificar los intereses que se les confía, llegando, en algunos casos, a apropiarse de lo que legítimamente corresponde a sus instituyentes.

Hay un tendal de víctimas expiatorias de las maquinaciones dolosas de ciertos procuradores, y ante la dolorosa experiencia de tantos hechos impunemente cometidos, se impone señor presidente, el amparo de los que se hallan en la situación de acudir a los tribunales, garantizando por un medio práctico y seguro, como es el depósito propuesto, la efectividad de las acciones que pudieran promoverse como consecuencia de esos manejos reprobables.

El depósito servirá no sólo para garantizar la conducta del procurador en sus relaciones con el mandante, sino también el pago de las costas devengadas por su parte y de las multas impuestas como una medida de disci-

plina. La disposición que a este respecto contiene el despacho no constituye una novedad, pues se halla registrada en la legislación antigua y ha sido también consignada por la moderna.

Ya las viejas ordenanzas de las audiencias de España habían establecido el deber del procurador de pagar las costas que se originaran por su parte, y ese deber se hallaba también impuesto por las leyes de enjuiciamiento de ese país.

Es sabido que el mandatario prolonga la personalidad del mandante y le reemplaza en todos los actos dentro de los límites de la relación de derecho, considerándose esos actos como ejecutados por una misma persona. Dentro de ese concepto, no puede existir un óbice para que se imponga al procurador el deber de pagar las costas que se originaran como consecuencia de esos actos, si les reconoce el derecho que ellos tienen de exigir la provisión de expensas para el juicio, conforme se halla consagrado desde las leyes de partidas hasta nuestros días por la práctica y sanción de la jurisprudencia, y poseyendo, como ellos poseen, el derecho que la ley les acuerda de promover contra su instituyente la acción de restitución de lo pagado.

Lo que podría ser materia de debate es la mayor o menor extensión del deber del procurador de pagar las costas, pues la discrepancia existe desde ya en el terreno de la legislación.

Si tuviéramos que remontarnos al antiguo derecho, veríamos cómo las "Leyes de Partida" establecían el deber del procurador de pagar los gastos que se originaran a su instancia, que comprendían los llamados propiamente gastos judiciales, los honorarios de los curiales y demás personas que intervenían en la práctica de las diligencias que él hubiera solicitado, a mérito del cuasi contrato que se establecía entre el mandatario y tales personas, como consecuencia de requerir sus servicios. Pero, en el caso de que se dictara una sentencia condenatoria, la ejecución de las costas adeudadas a la parte vencedora sólo podría hacer-

se efectiva sobre bienes del mandante y no del procurador, según el precepto de esas leyes de partidas. En el mismo sentido se han pronunciado los tratadistas al comentar las leyes de enjuiciamiento españolas de 1855 y de 1881.

Las leyes modernas difieren en cuanto al sistema aplicable en esta materia. Como resultado de su estudio y de una ponderada reflexión, la comisión de justicia ha creído conveniente adoptar el sistema según el cual se impone al procurador el deber de pagar las costas que se originaran por su parte, sistema que se halla consagrado por leyes orgánicas de varias provincias argentinas que se caracterizan por su legislación adelantada, como las de Entre Ríos, Córdoba, San Juan y San Luis.

Así, por ejemplo, la ley orgánica de la provincia de Entre Ríos establece en su artículo 163 lo siguiente:

"El apoderado, mientras ejerza el cargo, es solidariamente responsable de todos los gastos judiciales que se causen a su instancia, comprendiéndose en ellos los honorarios de su abogado, y en caso de condenación en costas responde también solidariamente de los gastos de honorarios del abogado y procurador del adversario que se hubiesen causado durante su representación, excepto cuando su poderdante renuncie voluntariamente a su defensa o se le hubiese revocado el poder".

La ley orgánica de la provincia de Córdoba, estatuye, en su artículo 141: "El apoderado, mientras ejerza el cargo, es solidariamente responsable de todos los gastos judiciales que se causen a su instancia, comprendiéndose en ellos los honorarios de su abogado, y en caso de condenación en costas responde también solidariamente de los gastos y honorarios de abogado y procurador del adversario, que se hubiesen causado durante su representación, excepto cuando se le hubiese revocado el poder antes de terminar la causa o cuando su poderdante renuncie espontáneamente a su defensa".

Es más o menos lo que dice la ley orgánica de la provincia de Entre Ríos.

La ley orgánica de la provincia de

San Luis dispone en su artículo 105: "El apoderado es solidariamente responsable de todos los gastos judiciales causados a su instancia, comprendiéndose en ellos los honorarios de su abogado, y en caso de condenación en costas responde subsidiariamente de los gastos y honorarios del procurador del adversario que se hubieren causado durante su representación, aunque se le hubiese revocado el poder antes de terminar la causa o su poderdante renuncie voluntariamente a su defensa. Si interpelado judicialmente, no verifica el pago dentro de tercero día, podrá procederse contra el apoderado en forma ejecutiva".

Y, por último la ley orgánica de la provincia de San Juan consigna en su artículo 97: "El apoderado mientras ejerza el cargo, es responsable de los gastos judiciales que se causen a su instancia, y en caso de condenación en costas, responde de los gastos de honorarios y abogado y procurador del adversario que se hubiesen causado durante su representación".

La provincia de Buenos Aires tiene su ley reglamentaria del ejercicio de la profesión, que en su artículo 8.º dice lo siguiente: "La fianza — fianza que debe ser dada por el procurador para poder ejercer la profesión — garantiza no sólo la responsabilidad del procurador para con sus mandantes por faltas, omisiones o delitos en el desempeño de su mandato, sino también el pago de los gastos, cuando proceda responsabilizarle personalmente por ellos".

Otras leyes, como las del Estado Oriental del Uruguay, preceptúan que el procurador responde solidariamente con el mandante de los gastos particulares y comunes que a éste corresponde abonar, y sólo de las costas a la parte vencedora cuando hubiera tomado expresamente sobre sí esa responsabilidad.

La comisión, señor presidente, al adoptar el sistema que consigna su despacho, ha deseado asegurar el pago de las costas a la parte vencedora que ha tenido que soportar muchas veces un pleito largo y oneroso, debi-

do a la mala fe y a la temeridad de los litigantes, habituados a burlar las sanciones de la justicia, a eludir el pago de las costas, ya por insolvencia pecuniaria, ya por las múltiples maquinaciones de una habilidad dolosa.

Es así cómo ha sido imposible con frecuencia hacer efectiva la responsabilidad en que había incurrido la parte vencida en el juicio, y es así también cómo han resultado irreparablemente damnificadas personas honradas y laboriosas, con todos los derechos acordados por la ley, que se habían hallado en el penoso e inevitable trance de tener que pleitear con tales litigantes.

El procurador, antes de aceptar un poder, debe prevenirse de la responsabilidad pecuniaria de su mandante o de la justicia que entraña el pleito que se le confía; pero una vez que lo acepta, debe colocarse en la situación legal de prolongar la personalidad del mandante con todas sus consecuencias, pagando las costas con que la ley castiga la injusticia y la mala fe.

El pago de esas costas no podrá ocasionar un perjuicio irreparable al procurador, desde que tiene el derecho de exigir la provisión de expensas para el juicio, como lo he dicho anteriormente, y tiene, en todo caso, la acción expedita contra su representado para obtener la restitución de lo pagado a la parte vencedora.

Entiende la comisión que con el sistema que aconseja su despacho se podría evitar, por lo menos en parte, la promoción de esos pleitos injustos, con que los litigantes irresponsables asedian a las gentes pacíficas y solventes; se podrá impedir el semillero de inagotables y rebuscados incidentes con que se dilatan hasta el cansancio y la más flagrante injusticia los pleitos más claros y más sumarios; se podrá poner un coto a las maniobras dilatadoras, permitiendo tan sólo litigar con razón y con derecho; se podrá realizar esa eterna y suprema aspiración de la justicia rápida y segura que en vano había perseguido la ley, porque había omitido proteger

al litigante honesto con previsión y energía por medio de una disposición inflexible y práctica como ahora se propone, y puedo afirmar que la comisión, al proponer el artículo pertinente de su despacho, no ha deseado ocasionar un perjuicio injustificado al gremio de procuradores, que le merece todos sus respetos y sus simpatías sino que se ha inspirado en el noble propósito de defender la buena fe y el derecho contra los procedimientos de la habilidad aviesa e irresponsable. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

La comisión de acuerdo con todas las leyes modernas que rigen en la materia, ha deseado también exigir la firma de letrado en todo escrito que se presente en los juicios, que no fuera de mero trámite, siempre que la parte se haga representar por un procurador.

Esa disposición tiende a velar, como fácilmente se comprende, por el mayor acierto en la tramitación de los juicios, auxiliándose así con eficacia la tarea de la justicia, y propende a defender mejor los derechos controvertidos.

El patrocinio obligado, así como la representación en juicio por medio de apoderados responsables y competentes, pueden establecerse como necesarias restricciones del principio de libertad, en favor de los intereses sociales.

Tal ocurre en el ejercicio de todas las profesiones liberales, y resulta indiscutible, señor presidente, tratándose de la aplicación de leyes procesales consideradas por todos los tratadistas y la constante jurisprudencia como de orden público.

Esa disposición vendría a derogar, en cuanto a ella se opusiera, la disposición de los artículos 8 y 9 del código de procedimientos de la capital federal, que consagra el principio de la libre representación en juicio.

Ese principio que tiene su origen en la constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873, vendría a quedar modificado en el sentido de que, si bien no se obliga a una persona a comparecer ante los tribunales repre-

sentada por un procurador o patrocinada por un abogado, se impone, sin embargo, para el caso de que optara por conferir un poder, que lo haga a favor de una persona debidamente habilitada y, en tal situación, ese mandatario se haga dirigir por un perito en derecho, como es el letrado en toda gestión que no fuera de mero trámite.

Se observa así que la ley que se proyecta vendría sólo a tener aplicación en lo que podríamos llamar propiamente la representación en juicio, sin abarcar todas las clases de mandato, aplicación que no puede ofrecer inconveniente entre nosotros, ante el texto intergiversable de nuestra ley civil, que felizmente ha evitado la confusión en que ha incurrido el código Napoleón en su artículo 1984, al emplear como términos sinónimos el mandato y la procuración, que ha dado margen a las explicaciones de Aubry y Rau y a las críticas de los grandes tratadistas franceses, que Laurent expone con su mágico estilo (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Estimo innecesario entrar por hoy en el estudio detallado de las diversas disposiciones que contiene el despacho, pues la oportunidad llegará cuando se produzca la discusión, que preveo animada de este asunto.

Vamos a entrar, señor presidente, con el debate de este proyecto en un terreno arayente, alejado de todas esas pasiones y parciales intereses que de vez en cuando perturban las deliberaciones de este cuerpo. Es este el lugar común en que podemos coincidir serenamente todos los representantes del pueblo, poseídos del generoso y decidido anhelo de mejorar y dignificar todo lo que atañe a la justicia. Con ese firme propósito la comisión ha producido su despacho, con todas las observaciones que podrán formular la sagacidad y la ilustración de los señores diputados, convencido de que era preferible, en todo caso, dictar una ley deficiente, susceptible de enmiendas sucesivas, antes que continuar con el actual estado de cosas, que había llegado a ocasionar tan graves perjuicios y a revestir en cier-

tos momentos los caracteres de escándalo. Y si este despacho, señor presidente, llegara en breve término a convertirse en ley, habríase complacido la comisión de su obra, al haber contribuido con su modesto esfuerzo a satisfacer una urgente e imperiosa necesidad pública. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! — Aplausos. Muchos señores diputados felicitan al orador.*)

Sr. Daneri. — Pido la palabra.

Voy a votar, señor presidente, a favor del despacho de la comisión, eloquentemente informado por el señor diputado por Corrientes. Creo con esto contribuir sinceramente, y dentro de mi modesta esfera de acción, a la sanción de una ley que ha de dar benéficos resultados.

La provincia de Entre Ríos tiene reglamentando el ejercicio de la procuración por una ley que tiene ya una vigencia de más de quince años y está basada en los mismos principios que sustenta el despacho que se discute, es decir, justificación de competencia, depósito de garantía, práctica forense y acreditar buenos antecedentes personales; principios que contribuyen a hacer del ejercicio de la procuración cosa útil e indispensable para la más correcta tramitación de los asuntos judiciales.

El cuerpo de procuradores de que la provincia ha sido completamente saneado y al presente está constituido en forma tal que es toda una garantía para los intereses de los litigantes. Son colaboradores eficaces de la administración de justicia y le aportan prestigios a la misma.

Es pues, con esa experiencia, con esa práctica adquirida y por lo que he podido palpar muy de cerca en el ejercicio de mi profesión de abogado, que voy a dar mi voto a favor del proyecto en discusión, sin perjuicio de que cuando se discuta en particular el proyecto haga algunas observaciones de detalle que no afectan por cierto los principios básicos de la ley.

Dejo así fundado mi voto en favor del proyecto.

18

DIARIO DE SESIONES

Sr. Moreno (R.) — Pido la palabra.

Desearía saber, señor presidente, si hay número, con el objeto de hacer una indicación.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Sí, señor diputado; hay número en la casa.

Sr. Avellaneda (M. A.) — Pido la palabra.

Sr. Moreno (R.) — Con permiso del señor miembro informante de la comisión de justicia, cuyo despacho se está tratando, yo desearía que la cámara resolviese una cuestión que ha quedado pendiente y que me parece que no va a dar lugar a discusión de ninguna clase. Si diera lugar a ella, desde luego expreso a la cámara que retiraría la indicación que formularé, porque no tengo el propósito de dificultar la consideración del asunto que está en discusión ni mucho menos.

Sr. Gibert. — Pido la palabra.

Sr. Moreno (R.). — Se trata, señor presidente, de lo siguiente. El último día de sesión, me parece, pregunté a la presidencia en qué condiciones había quedado el reparto del Diario de Sesiones: si íbamos a regirnos durante el corriente año, por el procedimiento de la suscripción o por el procedimiento antiguo de la distribución gratuita. Me contestó el señor diputado por la provincia de Buenos Aires, doctor Arce, diciéndome que el concepto de la comisión de presupuesto, en cuyo nombre hablé, era el de que se debió volver al procedimiento anterior de la distribución gratuita porque había fracasado por completo el de la suscripción. Yo presenté algunas cifras, que me parece el señor diputado ratificó, y quedamos en que el concepto de la comisión de presupuesto coincidía con el mío en el sentido de volver al antiguo sistema.

Pero como el criterio de la cámara se modificó habiendo sancionado el presupuesto de 1918 para el año 1919, podría quedar la duda de si volvía a

dad, y luego, por exceso de tiraje, o falta de regulación de los precios, o circunstancias ajenas a la presidencia, ha sido necesario solicitar el refuerzo de esa partida. Para que el presupuesto de la cámara en este renglón entre en una cantidad fija, para que los señores diputados tengan elementos de opinión concretos e ilustrativos sobre la cuestión que propone el señor diputado, me permito indicar que deleguemos en la presidencia de la cámara el asunto, para que ésta, como lo estime conveniente, proponga a la cámara, con todos los elementos necesarios, el sistema a adoptar.

Sr. Moreno (R.). — Pido la palabra.

Acepto la indicación del señor diputado, y rogaría a la presidencia que a la mayor brevedad produjera la información que el señor diputado propone.

Hago notar al señor diputado que la conveniencia de fijar un número mayor de ejemplares, reside precisamente en los precios. Lo que ha encarecido el costo del Diario de Sesiones, ha sido precisamente el sistema de la suscripción. Se resolvió imprimir una cantidad fija para servicio oficial y la que resultara según la suscripción, y como el precio de suscripción era inferior al costo de los ejemplares, cuanto más suscriptores había costaba más el Diario de Sesiones; y como no había sido posible hacer contrato por una cantidad grande sino por cantidad pequeña, había que pagar después el ejemplar de acuerdo con la suscripción que se producía, y eso es lo que ha encarecido el precio.

Acepto la indicación, que me parece muy plausible, del señor diputado, sobre todo porque, como he expresado, no deseo interrumpir con este asunto la consideración del que estaba tratando la cámara.

Sr. Presidente (Goyeneche). — La presidencia, oportunamente, traerá los antecedentes a que se refiere el señor diputado.

19

EJERCICIO DE LA PROCURACION

Sr. Gibert. — Pido la palabra.

La situación en que me encuentro colocado en este momento como miembro de la comisión de justicia desde hace muy pocos días, y en cuyas deliberaciones no he participado respecto al proyecto aconsejado, hace que no sepa si es esta la oportunidad en que deba hacer la salvedad de que me reservo el derecho de hacer objeciones al proyecto presentado, con el cual, si bien concuerdo en su fondo, en sus orientaciones, y en los principios que lo informan, discrepo en algunos detalles; o si, como miembro de la comisión, debo desde ya dejar establecida mi discrepancia para la discusión en particular en cuanto a la extensión de la responsabilidad para los procuradores, etcétera.

Sr. Rodríguez (A.). — Eso es para la discusión en particular.

Sr. Vergara. — El señor diputado no firma el despacho.

Sr. Gibert. — Pero formo parte de la comisión.

Sr. González. — El despacho de la comisión se ha producido el año pasado; en esa época el señor diputado no formaba parte de la comisión, de manera que el despacho no ha podido llevar su firma.

Se encuentra, entonces, en completa libertad de acción para impugnar el despacho de la manera como estime conveniente, según el criterio que tenga en las diversas cuestiones planteadas.

Sr. Gibert. — Precisamente, en esa situación me reservo para la discusión en particular el hacer las objeciones que considere oportunas al despacho.

Sr. Rodríguez (A.). — Pido la palabra.

Voy a decir muy pocas, porque después de las que ha pronunciado el señor miembro informante de la comisión no se puede agregar mucho al respecto.

Autor de uno de los proyectos res-

pecto de la reglamentación de la procuración, creo que el despacho de la comisión tiende a llenar en las actuales circunstancias una necesidad muy sentida.

La administración de justicia, en mi concepto, puede parangonarse a una maquinaria formada por los tribunales, desde el más alto hasta el más inferior, por los abogados, los procuradores y demás personas que intervienen como auxiliares. Como acabo de decir, los procuradores forman parte de este engranaje, y si no reúnen las condiciones que con mucho acierto ha señalado el señor miembro informante de la comisión en lo que se refiere a su competencia, honestidad y probidad, en mi concepto la administración de justicia se resiente.

Yo deseo hacer saber a la honorable cámara, por el conocimiento personal que tengo, que entre el gremio de procuradores que actúan en esta capital, que es bastante numeroso, hay muchos muy buenos, muy competentes, muy honestos y que reúnen todas las condiciones necesarias para que cualquier persona los pueda nombrar su representante en juicio, con toda confianza; pero que al lado de éstos hay otros que tienen condiciones pésimas, y que por el imperio de esta ley se verán desalojados de posiciones que jamás debieron ocupar. La mayor parte de los procuradores de esta capital se han apersonado no sólo a la comisión sino también a casi todos los señores diputados para pedirles la sanción de este proyecto, ya que él los ha de dignificar y ya que ellos son los más interesados en esa sanción. Aprobado este proyecto, desaparecerán los malos procuradores, que son los entorpecedores de la tramitación regular de los juicios, con lo cual la justicia ganará en regularidad y en rapidez.

Yo deseo, señor presidente, que este proyecto se sancione a la brevedad posible y que salga con los grandes prestigios que importa el voto favorable de todos los señores diputados.

Por estas razones, voy a votar en general el despacho de la comisión, reservándome para la discusión en

particular hacer algunas objeciones en el momento que corresponda.

—Los señores diputados Avellaneda (N. A.) y Fernández piden la palabra.

Sr. Maidana. — Me parece que hay que hablar poco, porque es un asunto muy claro.

Sr. Avellaneda (N. A.). — Yo voy a ser muy breve, porque pienso como el señor diputado Maidana, que es un asunto este, en que debe hablarse poco, no sólo porque el luminoso y completo informe del señor miembro informante, lo ha ilustrado perfectamente, sino también porque es bien claro y sencillo. Pero, como autor de uno de los proyectos que ha sido despachado por la comisión de justicia, creo de mi deber decir, ya que la cámara se ha avocado el estudio de esta importante cuestión, que en general acepto el dictamen de la comisión, salvo algunas objeciones que haré en particular.

Así, pues, sólo diré, señor presidente, que la experiencia de todos los países que se han preocupado en mejorar su justicia, enseña que el medio más eficaz para evitar los errores y dilaciones que la desprestigian, es la selección del personal que ha de hacerla efectiva y la reglamentación severa y prolija de las funciones y deberes de sus auxiliares. De modo, pues, que en presencia de esta reglamentación, que va a depurar y sanear nuestros tribunales, pues alejará de ellos muchos elementos perniciosos, cabe repetir lo que ya se ha dicho con fundamento: que habremos dado un gran paso en nuestra legislación procesal, si este proyecto se convierte en ley.

Antes de terminar quiero explicar el por qué de un hecho que habrá llamado la atención de los señores diputados que se han ocupado de esta reglamentación. ¿Qué causa ha impedido que esta ley de la procuración, tan anhelada y tantas veces presentada, no haya obtenido sanción? En este momento hay tres proyectos que han merecido el estudio de la comisión, y cuando tuve el honor de presentar el mío encontré buscando ante-

cedentes, no menos de ocho proyectos sobre el mismo asunto sometidos a la consideración de la cámara en diversos períodos. Me pregunté entonces por qué, no obstante la cantidad de iniciativas y del aplauso con que habían sido recibidos, no se habían traído en una ley. Esto me llamaba tanto más la atención cuanto que los procuradores eran los que con más empeño pedían la sanción de este proyecto, y era que ellas proyectaban una ley de exclusión, en vez de una ley de elección. Este despacho, ha subsanado esa deficiencia, pues ha proyectado una reglamentación por selección y no por exclusión, como los demás.

En efecto, señor presidente; se disponía en los demás proyectos que después de la sanción de la ley no habría más procuradores que los diplomados, salvo aquellos que durante diez años hubieran ejercido la profesión y llenaran los demás requisitos exigidos por la ley sin tener en cuenta que ninguna universidad en el país otorgaba en ese momento diploma de procurador. Recién ahora las universidades de La Plata y de Buenos Aires han establecido un curso de procuradores; es por eso que esta ley dejará de ser una ley de exclusión para ser simplemente una ley de selección y de dignificación. Nada más tengo que agregar por ahora.

Sr. Fernández. — Pido la palabra.

Yo estoy de acuerdo en general con el despacho de la comisión, reservándome hacer en particular algunas observaciones que tendrán por objeto, dentro siempre del espíritu que informa el despacho, salvar la situación extrema en que la ley dejaría a un número respetable de personas que figuran con dignidad en el grupo de procuradores de la capital y que no alcanzan el límite fijado en el despacho en cuanto a los diez años de práctica, pero que exceden la mitad de dicho término y reúnen además todos los requisitos personales que este proyecto exige.

Sería peligroso, para la equidad y la justicia, señor presidente, dejar al margen de la profesión a mucha gente

acreditada por su competencia y honestidad, la cual ha hecho de esa profesión su fuente principal de recursos.

Con estas observaciones, que he de reiterar en la discusión en particular, dejo fundado mi voto en favor del despacho de la comisión.

Sr. Escobar. — Pido la palabra.

Considero que en general la discusión de este despacho está agotada; pero la circunstancia de haber sido autor de uno de los proyectos estudiados por la comisión me obliga a manifestar que acepto el despacho, y que sólo haré algunas ligeras observaciones en la discusión en particular.

Las deficiencias prácticas que se notaban en los proyectos presentados han sido salvadas por la comisión, consultando los verdaderos intereses generales, con conocimiento exacto de la acción que desenvuelven los procuradores, y compenetrándose bien de las deficiencias observadas en la tramitación judicial.

El proyecto tiene un carácter amplio, pues legisla no sólo para la capital, sino también para los territorios nacionales, donde significa una necesidad más urgente todavía el saneamiento de ese gremio, dado que los abogados escasean y los pleitos están en manos de los procuradores.

Existe ya instituida en nuestra facultad de derecho de la capital la carrera especial de procurador, que fué implantada por gestión del diputado doctor Nicolás Avellaneda, cuando fué presidente de la comisión de justicia, y me place recordar en este momento esa gestión plausible de nuestro distinguido colega.

Estimo que el procurador, que es el ayudante del abogado en los litigios, debe llenar ciertos requisitos, ciertas exigencias de preparación, de conocimiento del derecho, y debe constituir una garantía de corrección y honradez. Este proyecto, como se ha dicho, es de saneamiento y de dignificación, y por eso lo votaré complacido, cumpliendo mi deber como legislador.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Se

va a votar en general el despacho de la comisión.

—Después de algunos momentos de espera para formar quórum:

Sr. Presidente (Goyeneche). — No hay número. Invito...

Sr. Maidana. — Creo que es una desconsideración de los señores diputados que se han retirado dejar a la cámara sin número en este momento. Yo no sé si esos señores diputados, cuyos nombres desearía conocer, han pedido permiso a la presidencia.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Algunos señores diputados se han retirado con autorización de la presidencia.

Sr. Maidana. — Permítame el señor presidente que le manifieste que no ha

debido conceder esos permisos, para dejar a la cámara sin quórum.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Absolutamente, señor diputado.

Cuando la presidencia ha autorizado a diputados cumplidores, que vienen por excepción a solicitar ese permiso, a retirarse, había quórum con exceso: ha habido hasta 80 diputados presentes en la sesión de hoy.

Sr. Maidana. — Quiere decir que se han ido algunos sin pedir permiso.

Sr. Presidente (Goyeneche). — Es por eso que le contesto con toda fidelidad a la pregunta: que algunos han pedido permiso; otros no.

Invito a los señores diputados a levantar la sesión.

—Son las 7 y 5 p. m.